

mular al primero por el Juzgado de Distrito, en que alega el C. Rodolfo G. Canton que la misma autoridad contra quien solicita el amparo, no pudiendo hacer efectivo el pago del impuesto en los bienes que posee en la ciudad, habia enviado á su executor á la hacienda de Opichen de su propiedad, donde se habia trabado ejecucion en diez cabezas de ganado mayor, cuya providencia quedó levantada por haber entregado el hermano del peticionario la cantidad por la cual era requerido; alegando, que con dichos actos se violaban en su persona las garantías que otorgan los artículos 16 y 17 de la Constitucion federal. Visto el parecer del Ministerio público; el informe con justificacion rendido por la autoridad respectiva y las demas constancias de autos.

Considerando: que el Tesorero municipal de Mérida ha cobrado en la órbita de sus atribuciones al notificar el mandamiento de pago al C. Rodolfo G. Canton, y vista su oposicion, hacer efectivo el embargo en sus bienes, usando de los recursos que conceden las leyes en los casos como el presente, en que se resisten los causantes al pago de los impuestos.

Considerando: que dichas providencias son arregladas á derecho y que el quejoso podia usar de los que cree asistirle, ante quien corresponda, por lo que respecta á la apreciacion hecha por la Junta cuotizadora que le ha designado como comerciante por mayor, sin oponer la resistencia de que ha usado contra los agentes del poder público. Con tales fundamentos se decreta:

Primero. Se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Mérida en la parte que declara, en nombre de los Poderes de la Union, que no ha lugar al amparo solicitado.

Segundo. Con arreglo al artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se le impone al quejoso la multa de doscientos pesos.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado

remitante con testimonio de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos respecto del primer punto y por mayoria respecto del segundo, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zuvala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar* secretario.

Son copias que certifico. México, Agosto dos de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de esta capital por el C. Lic. Ezequiel Montes, en representacion de los miembros del Ayuntamiento de esta ciudad del presente año, contra la orden del Gobierno del Distrito que los suspendió de sus funciones.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El C. Promotor dice: que habiendo interpuesto el C. Lic. Ezequiel Montes, ante el Juzgado recurso de amparo á nombre de los CC. municipales que le confirieron el poder que obra en autos, por haber sido suspensos en sus funciones municipales por la orden que el C. gobernador Gabino Bustamante comunicó el C. José M. Lozano, presidente del Ayuntamiento suspenso y acompañó á su escrito, quejándose de que en las personas de sus representados se violaron las garantías que concede la Constitucion en sus artículos 20 y 21. Sustanciado el juicio con arreglo á la ley y man-

dado recibir á prueba, el C. Montes pidió que la Orden que tenia presentada se desglosara del cuaderno principal y se tuviera como su prueba. Concluido ese término, el Juzgado ha citado para sentencia y mandado queden los autos á la vista para que se produzcan los alegatos, y por su parte exhibe los presentes apuntes.

La base del amparo, la toma el C. Montes de la Orden de suspension que ha presentado, y lo funda diciendo que han sido violadas las garantías concedidas por los artículos 20 y 21 de la constitucion. Para que se vea que no hay tal violacion, basta la lectura de los artículos constitucionales citados.

Respecto al artículo 20, á primera vista se conoce que es inaplicable al caso que nos ocupa; como se ve por su contesto, es referente á las formas tutelares de un juicio criminal, y es indudable que ni el C. gobernador era juez de lo criminal, ni á los ciudadanos municipales se les formó causa criminal por ese funcionario. Decir que se trata de un juicio criminal, es suponer lo que no ha existido y trabajar en molinos de viento. Seguir examinando cuando deben tener lugar los juicios criminales y qué garantías deben gozar los reos, no es materia que debe controvertirse en un juicio de amparo que se intenta contra actos administrativos como el reclamado, que no puede tener otra naturaleza cuando no hay un juez de lo criminal, reos ni causa, por lo cual queda demostrado que es imposible la violacion del artículo citado.

El artículo 21 tampoco ha sido violado, pues el C. gobernador no impuso pena á los quejosos suspendiéndolos en su encargo.

La pena importa un acto positivo perjudicial al agraviado que lo priva de un beneficio; y *¿dónde está el que disfrutaban los ciudadanos municipales que desempeñaban una carga concejil*, supuesto que no produce ningun beneficio fuera de la honra que dá á los concejales representar á sus comitentes? La pena importa un castigo, y

este no lo es la suspension, que solo es el interregno para que se dicte una resolucio que tanto puede ser favorable como adversa. La pena importa un acto definitivo contrario á la suspension, el cual para no cumplirse necesita la revocacion por el superior ó la remision por el indulto; en el caso, el juez de los quejosos es el de Distrito que no es el superior del gobernador pues giran en órbitas distintas y el indulto no procede sino en lo ejecutoriado y no ha sido solicitado.

El C. Montes cita al Esericho y testualmente en estas palabras: "la suspension no recae sino sobre el ejercicio, y de consiguiente nada quita del rango ni del carácter del oficial ó beneficiado. ¿Pues si los regidores conservan su rango que es el único beneficio que les dá la carga concejil, cómo se dice que se les ha impuesto una pena?"

En este juicio se trata de una providencia administrativa, y en el Orden administrativo es sabido, que la Constitucion permite la destitucion de un empleado sin la formacion de un juicio, y si esto acontece cuando se impone la pérdida del empleo y media el beneficio del emolumento, ¿cómo no podrá tener lugar la suspension cuando se trata de una carga concejil sin beneficio?

Que la suspension no es una pena, es conforme al derecho constitucional, supuesto que aun tratándose de altos funcionarios el veridicto envuelve la suspension del cargo al acusado, y esto sin que sea la declaracion absolutoria ó condenatoria, sino pura y simplemente, por decirlo así, el desafuero del acusado, para dejar al que sea su juez expedito en su jurisdiccion.

El amparo no procede tratándose de derechos políticos, y debe hacerse distincion en los que tenga un ciudadano por su posicion pública, y los que le corresponden por hombre. Las garantías que otorga la Constitucion en la seccion 1ª del tit. 1º, son las que dá al hombre como habitante de la nacion mexicana, independiente de su cla-

se y condicion, y no miran al Estado sino al hombre.

La Constitucion en esta parte, resume principalmente los principios de la democracia, protegiendo con perfecta igualdad los derechos que todos los habitantes tienen como hombres, equiparando el primero con el último, pues consigna las prerrogativas supremas de la verdadera libertad, la vida y la propiedad.

Comprender en el juicio protector del amparo los derechos políticos, era minar la organizacion social suprimiendo la libertad administrativa legal, que si trae consigo obligaciones onerosas, son de las recíprocas que se prestan en el pacto social.

Que el C. gobernador tuvo facultades para imponer la suspension, es un hecho mientras estén vigentes las leyes de 11 de Agosto de 1813, la de 20 de Marzo de 1837 y la de 12 de Octubre de 1855, siendo de considerarse las razones que en este punto contiene el informe del C. gobernador Chavero; pero de cualquier modo y aunque se tratara de abusos de autoridad, estando ese acto fuera del amparo, no toca al juzgado calificarlo. El C. Montes en su escrito lamenta la situacion anomala del Distrito, y la dependencia que guarda el Ayuntamiento del gobernador y este del gobierno general; pero esto es ageno al juicio y deberán tomarlo en consideracion los legisladores para emanciparlo de esa tutela, y ojalá que se llegue hasta constituir como cuarto poder el municipal; pero existiendo la organizacion actual y las leyes que colocan al C. gobernador como jefe de él, con las facultades que le dá, tienen que pasar las cosas como hasta aquí, no obstante los inconvenientes.

En el informe que emitió el C. Juez 2º de Distrito, llama la atencion del Juzgado con las siguientes palabras: "que la suspension del Ayuntamiento *aun subsiste como determinada por mí*, puesto que no he levantado ni revocado la que en nueve de Junio dictó el Gobierno del Distrito." Es-

ta es otra razon que persuade, de lo improcedente del amparo: sin entrar al exámen de la culpabilidad del Ayuntamiento suspenso al estarlo juzgando el juez 2º de Distrito, y suspenso igualmente por él, está demostrado que ha sido obsequiado el precepto constitucional que quiero, que el acusado de cualquier delito tenga un juez.

Queda probado con lo expuesto, que ninguno de los artículos constitucionales reclamados han sido violados con la Orden del C. gobernador que suspendió el Ayuntamiento, y lo referente á los CC. regidores considerados como particulares, es de mas fuerza tratándose de la corporacion, pues ninguna corporacion puede jamas tener derecho al amparo, segun el artículo 102 de la Constitucion.

La materia del presente juicio no puede reputarse nueva en el derecho constitucional, y hay que seguir los principios sancionados por ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia, la que en caso idéntico, tratándose del Ayuntamiento de Pachuca, resolvió que no procedia el amparo, y ocupándose de derechos políticos en diversas ejecutorias y entre otras en la del ex-magistrado de la Corte C. Manuel Ruiz, por lo que el Juzgado puede en definitiva declarar que no ha lugar el amparo.

México, Julio diez y siete de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—*Herrera Campos.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

México Julio veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo seguido ante este juzgado primero de Distrito, á solicitud del C. Lic. Ezequiel Montes, en representacion de los CC. José María Lozano, Francisco Menocal, F. Morales Medina, Andres A. Quijano, Antonio Robert, José S. Gutierrez, Vidal Castañeda y Nájera, José H. Nuñez, Hilarion Frias y Soto, De-

metrio Montesdeoca, Teodosio Villagra, II. Aburto, Luis Hernandez Gallardo, Javier Erdozain, A. del Rio, M. A. Mercado, L. Ortiz, Luis Malanco y A. Magaña, todos miembros del ayuntamiento de esta ciudad, del presente año, y suspenso en el ejercicio de sus funciones por el gobierno del Distrito, en virtud de la orden de 9 de Junio próximo pasado; vistas las diligencias practicadas, las pruebas presentadas y alegato producido; y visto el informe rendido por el C. gobernador, y parecer del C. Promotor, resulta:

Que los ciudadanos representados por el C. Ezequiel Montes, se quejan de que al haber sido suspenso el ayuntamiento, se han violado en sus personas las garantías que otorgan los artículos 20 y 21 de la Constitución general de la República.

Que el art. 20 previene, que en todo juicio criminal el acusado sepa el motivo del procedimiento, que se le tome declaración preparatoria dentro del término de 48 horas, que se le carce con los testigos y que se le faciliten los datos que necesite para su defensa.

Que el art. 21 establece, que la aplicación de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial.

Que según el tenor de estos artículos y la aplicación que de ellos hacen los quejosos, es claro que al haberse suspendido al ayuntamiento, aseguran que se les ha aplicado una pena por una autoridad que no es la judicial, y sin habérseles instruido el juicio correspondiente.

Que por la orden de 9 de Junio se suspendió al ayuntamiento hasta nueva orden, porque pretendía falsear el voto público en las elecciones, apoyado el ciudadano gobernador, al hacerlo, en el art. 9 de la ley de 8 de Mayo de este año, y en el 19 de la ley de 23 de Junio de 1812;

Que si por la orden referida se suspendió al ayuntamiento, es inconcuso que la pena que se impuso fué á la corporación y no á cada uno de sus miembros como indi-

viduos particulares, pues en la orden se encuentran las palabras siguientes:

«Se ve en la necesidad de suspender hasta nueva orden al actual ayuntamiento de México en el ejercicio de sus funciones, llamándose para que lo sustituya al ayuntamiento anterior.»

Que las facultades que tiene el gobierno del Distrito para suspender á un ayuntamiento, son innegables, atendiendo á las disposiciones legales que citó el ciudadano gobernador que dictó la orden de fecha 9, y á las que se hallan en el informe que rindió el ciudadano que lo sucedió en el cargo de gobernador.

Que teniendo facultades para decretar la suspensión decretada, en cuestión, la pena, como se tiene asentado, la sufrió el ayuntamiento como corporación, en ejercicio de sus funciones públicas;

En este caso el gobierno del Distrito, habrá violado las garantías políticas del ayuntamiento, pero no las individuales de los ciudadanos quejosos, por lo que, tendrá lugar el juicio de responsabilidad, pero no el de amparo;

Estos fundamentos los tuvo presentes la Suprema Corte de Justicia en su ejecutoria de 17 de Marzo de este año para no haber amparado al ayuntamiento de la ciudad de Pachuca, que fué suspenso por el gofo político;

Que el amparo se concede al individuo, al hombre y no á la corporación, según el tenor expreso de los artículos 101 y 102 de la Constitución, pues en el primero se lee: «Por leyes ó actos de cualquiera autoridad, que violen las garantías individuales,» y en el segundo: «La sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares;»

Que esto se confirma atendiendo á que los artículos 20 y 21 que se consideran infringidos por la suspensión del ayuntamiento, pertenecen al título 19, sección 19 de la constitución, que trata exclusivamente

de los derechos del hombre y no de la corporación;

Que si el gobierno del Distrito dictó la suspensión sin facultades, habrá lugar, con mas razon, á la responsabilidad; pero no al amparo, de cuyo sentir fué tambien la Suprema Corte de Justicia en la ejecutoria citada;

Que este juzgado no puede estimar las causas de la suspensión, porque al pedirse informe al ciudadano gobernador, este funcionario dijo: que careciendo del expediente que se formó para dictarla, se pidiera informe al C. Juez 2º de Distrito por tener el dicho expediente;

Que pedido informe al C. Juez contestó, que la causa se hallaba en sumario, que la suspensión del ayuntamiento subsistía como determinada por él, porque no habia revocado la de 9 de Junio, que si se lo pedían constancias se le señalaran, las que daría si la naturaleza y estado de la causa lo permitían;

Que si bien el C. Ezequiel Montes ha entablado el presente juicio, sosteniendo que han sido violadas en los ciudadanos sus representados las garantías que á todo habitante de la República conceden los artículos 20 y 21 de la Constitución, esto no lo ha justificado, porque la suspensión dictada en 9 de Junio fué en contra del ayuntamiento, y no en contra de cada uno de los quejosos como particulares.

Que esto se confirma como se ha dicho, á la simple lectura de la Orden, con el agregado, de que los mencionados quejosos como particulares no ejercían ningunas funciones públicas en las que fueran suspensos, pues única y exclusivamente lo ha sido el ayuntamiento, que es una corporación sin que la puedan representar todos los regidores á la vez en lo particular.

Que siendo un hecho de que se sigue ante el C. Juez segundo de Distrito el juicio respectivo en contra del ayuntamiento suspenso, porque pretendía falsear el voto público en las elecciones, no hay duda de que

el art. 20 de la Constitución está cumplimentado y no puede tener aplicación, y que mas, tratándose en ese artículo de las formas de un juicio criminal, el ciudadano gobernador no era juez de ese ramo, y á los quejosos no les formó causa criminal.

Que por lo mismo la suspensión fué una medida preventiva, sin que pueda considerarse como la aplicación de una pena, propiamente tal, supuesto que no ha habido un acto positivo perjudicial, y se espera el término del juicio que se instruye, por lo que el art. 21 no se puede considerar infringido; y que las razones alegadas por el C. Promotor convencen de que cuando se atacan los derechos políticos, no hay lugar al amparo, el que cita en su apoyo ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia; con arreglo á lo expuesto, al tenor de los artículos 101 102 de la Constitución general de la República, y al de la ley de 20 de Enero de 1969, fallo:

Que la justicia federal no ampara á los CC. José María Lozano, Francisco Menocal, F. Morales Medina, Andres A. Quijano, Antonio Robert, José J. Gutierrez, Vidal Castañeda y Nájera, José H. Núñez, Hilarion Frias y Soto, Demetrio Montesdeoca, Teodosio Villagra, H. Aburto, Luis Fernandez Gallardo, Javier Erdozain, A. del Rio, M. A. Mercado, L. Portu, Luis Malanco y A. Magaña, en contra de la Orden de 9 de Junio próximo pasado, por la que el gobierno del Distrito suspendió al ayuntamiento de esta ciudad, de este año, en el ejercicio de sus funciones, porque pretendía falsear el voto público en las elecciones, imponiéndose á los quejosos el minimum de la multa que asigna la ley citada.

Hágase saber, sáquense copias de esta sentencia para que se publiquen en el *Diario Oficial y Semanario Judicial*, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia.

Así lo mandó y firmó el C. Juez primero de Distrito, Lic. José Isaac Sancha.

Doy fé.—*J. L. Sancha.*—*Joaquín Sánchez González*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Julio veintinueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado 1º de Distrito de México, por el C. Lic. Ezequiel Montes, en representación de los CC. José M. Lozano, Francisco Menocal, F. Morales Medina, Andrés A. Quijano, Antonio Robert, José F. Gutiérrez, Vidal Castañeda y Nájera, José H. Nuñez, Hilarión Frias y Soto, Demétrio Montes de Oca, Teodosio Villagra, H. Aburto, Luis Fernandez Gallardo, Javier Erdosain, A. del Rio, M. A. Mercado, L. Portu, Luis Malanco y A. Magaña, miembros del ayuntamiento de esta ciudad, del presente año, contra la orden del gobierno del Distrito, de nueve de Junio último, que los suspendió en sus funciones: lo pedido por el C. Promotor fiscal; lo alegado por el Lic. Montes y todo lo demás que se tuvo presente y convino ver: Considerando:

Primero; que la orden dictada por el C. gobernador del Distrito federal en nueve de Junio del corriente año, ha tenido por único y exclusivo objeto suspender al ayuntamiento de esta capital en el ejercicio de sus funciones y se ha ceñido á impedir que las ejerza.

Segundo; que esto supuesto, ha sido un acto claro y manifiestamente gubernativo.

Tercero; que conocida esa naturaleza estrictamente gubernativa del acto, no pueden ser aplicables las prescripciones del art. 20 de la Constitución federal, porque este habla expresamente de las garantías que deben observarse «en todo juicio criminal;» y los actos gubernativos no son juicios criminales.

Cuarto; que la orden citada de nueve de Junio tiene por fundamento las termi-

nantes prescripciones contenidas en la ley de 24 de Marzo de 1813, en la de 20 de Marzo de 1837 y en la de 21 de Diciembre de 1840.

Quinto; que si bien esas leyes necesitan reforma, no es lícito dudar de su vigencia actual, porque está expresamente declarada en la del 12 de Octubre de 1855, y por que su observancia ha sido constante y su aplicación frecuente.

Sesto; que reconocida la vigencia y observancia de esas leyes, el gobernador del Distrito federal tuvo facultades para suspender al ayuntamiento de la Capital.

Setimo; que aunque una de esas leyes lo impone la obligación de proceder con acuerdo de la asamblea departamental, tal aprobación está sustituida hoy con la del ejecutivo de la Union, quien la ha dado en el presente caso por el conducto debido que es el Ministerio de Gobernación.

Octavo; que aun suponiendo que el gobernador del Distrito federal hubiera obrado sin facultades ó hubiesen tras limitadas las que tiene, tal abuso que seria motivo bastante para exigirle la responsabilidad legal, es absolutamente ineficaz para fundar la procedencia del juicio de amparo; porque esto solo tiene lugar cuando se trata de garantías individuales; y la orden reclamada ha recaído sobre la corporación como tal, y no sobre sus miembros como individuos; teniendo por objeto impedir los actos oficiales de la corporación y no el ejercicio de derechos de los individuos.

Noveno; que por lo mismo, faltan las dos condiciones mas esenciales para que proceda el juicio de amparo, que son, tratarse de individuos particulares y de violación en ellos de garantías individuales.

Décimo; que aunque se ha intentado dar á la suspensión del ayuntamiento el carácter de pena impuesta á sus miembros, tal pretensión es notoriamente infundada, porque la exclusión de los individuos no es mas que una consecuencia lógica y necesaria de la suspensión de la corporación.



Undécimo; que el concepto anterior se confirma con el hecho constante en autos de haber sido consignados los regidores á su juez competente, pues esto aclara con evidencia que la suspension del ayuntamiento fué una medida de estricto órden público, y la conducta de los individuos pasó á ser objeto de un juicio legal de responsabilidad, al cual corresponde de pleno derecho toda la parte penal. Por tales fundamentos, de conformidad con los artículos 101 y 102 de la Constitución se reforma el fallo pronunciado por el juez 1º de Distrito de México, el 21 del corriente mes y año; y se decreta: que la justicia de la Union no ampara ni protege á los CC. José Mº Lozano, Francisco Menocal, F. Morales Medina, Andres A. Quijano, Antonio Robert, José J. Gutierrez, Vidal Castañeda y Nájera, José H. Nuñez, Hilarion Frias y Soto, Demetrio Montes de Oca, Teodosio Villagra, H. Aburto, Luis Fernandez Gallardo, Javier Erdozain, A. del Rio, M. A. Mercado, L. Portu, Luis Malanco y A. Magaña, en contra de la órden de 9 de Junio próximo pasado por la que el gobierno del Distrito suspendió al ayuntamiento de esta ciudad, de este año, en el ejercicio de sus funciones.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado 1º de Distrito de México, con copia certificada de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron. *S. Lerdo de Tejada. — Pedro Ogazon. — Juan J. de la Garza. — José Arceaga. — J. M. Lafragua. — P. Orta. — Ignacio Ramirez. — M. Anza. — S. Guzman. — M. Zavala. — José García Ramirez. — L. Guzman. — Luis Mº Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Agosto cinco de mil ochocientos setenta y uno. — *Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido en el Juzgado de Distrito de Tlaxcala por los CC. Prudencio y Jesus Ibarra contra el jefe político de Ciudad Garcia por violacion de los artículos 5, 13, 20 y 21 de la Constitución federal.*

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que en el juicio de proteccion y amparo promovido por Prudencio y Jesus Ibarra, contra la providencia del C. Jefe político del partido de Garcia, que en 17 de Abril último los remitió á esta capital destinados á cubrir las bajas del ejército nacional, contra su voluntad, el funcionario responsable manifiesta por vía de informe en lo principal de la queja que, habiendo el gobierno del Estado dispuesto en 24 de Marzo la remision del contingente de sangre del partido en los mismos términos del año próximo pasado, considerando á los Ibarra vagos, perniciosos á la sociedad y notados públicamente de bandidos, los aprehendió, consignándolos á los reemplazos del ejército, y agregando, que no obstante dicha nota pública, no hay pruebas suficientes para juzgarlos por tal delito.

Está pues demostrada la verdad del hecho en que se funda la queja objeto de este juicio; y aunque la Jefatura política de Garcia tuviera los malos informes que dice de la conducta de los Ibarra en los lugares de su residencia, previniendo la Constitución federal y leyes vigentes que se averigüen y castiguen los delitos, llenándose las formalidades y requisitos que ellas establecen, á fin de conservar las garantías del hombre, en el caso presente es indudable que se han infringido los artículos 13º, 20º y 21º constitucionales, y por lo mismo procede el amparo que solicitan los quejosos; porque nadie puede ser condenado sin que preceda el juicio respectivo, en que el ac-